



**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO VEINTITRÉS (23) PENAL MUNICIPAL  
CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ D.C.**

**Juez:** Luz Ángela Corredor Collazos  
**Radicación:** 110014009023202300057  
**Accionantes:** Jaime Andrés Lezama Osorio y  
Laura Sharkey  
**Accionado:** Prabyc Ingenieros S.A.S.  
**Motivo:** Acción de tutela 1° instancia  
**Decisión:** Hecho Superado

*Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023).*

### **1. ASUNTO**

El Juzgado Veintitrés (23) Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá D.C., decide sobre la acción de tutela instaurada por JAIME ANDRÉS LEZAMA OSORIO y LAURA SHARKEY, en protección de su derecho fundamental a derecho de petición y debido proceso, cuya vulneración le atribuye a PRABYC INGENIEROS S.A.S.

### **2. HECHOS**

Indicaron que radicaron derecho de petición el 24 de febrero de 2023 ante la sociedad accionada, solicitando i) informar fecha, hora y notaria en la cual se suscribirá la escritura pública translaticia del dominio del inmueble, de conformidad con la cláusula decima primera del contrato, teniendo en cuenta que el valor de inmueble fue cancelado en su totalidad; ii) informar de manera clara y especifica la fecha en la cual se efectuara la entrega material del inmueble conforme con la cláusula decima segunda del contrato; iii) informar la fecha estimada de la entrega de los bienes comunes de uso y goce general, sin que a la fecha haya dado respuesta del escrito petitorio.

En consecuencia, solicitan la protección de los derechos fundamentales invocados, y ordenar emitir respuesta a lo solicitado en el derecho de petición impetrado.

### **3. ACTUACIÓN PROCESAL**

**3.1.** Mediante auto del 23 de marzo de 2023, el Despacho avocó el conocimiento de la presente acción constitucional, disponiendo correr traslado de la misma a la accionada PRABYC INGENIEROS S.A.S., con miras a garantizar su derecho de defensa y contradicción frente a los hechos objeto de tutela, para que en el término improrrogable de un (1) día contado a partir del recibo de la respectiva notificación, se pronunciaran y allegaran los documentos que considerara pertinentes<sup>1</sup>.

**3.2.** El Apoderado de PRABYC INGENIEROS S.A.S., en respuesta, confirmo que el derecho de petición se radico 24 de febrero de 2023, frente al cual el 27 de marzo de 2023 enviaron respuesta a los accionantes, allegando tanto la respuesta como la constancia de entrega del correo, obsérvese:

<sup>1</sup> Ver archivo 006 en cuaderno digital.



**REFERENCIA: respuesta a derecho de petición de fecha 24 de febrero de 2023 apartamento 1617 La Quinta en la ciudad de Bogotá**

De conformidad con lo ordenado mediante auto de fecha *veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)*, proferido por el **JUZGADO VEINTITRÉS (23) PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ D.C.**, por medio de la cual se corre traslado del auto admisorio de la acción de tutela instaurada por ustedes, nos dirigimos a para dar:

#### RESPUESTA CONCRETA

Respecto de sus peticiones que de manera respetuosa nos permitimos transcribir:

1. *INFORMAR, fecha, hora, y notaría en la cual se suscribirá la escritura pública de transferencia del Inmueble, de conformidad con la cláusula décima primera del Contrato. Lo anterior, teniendo en cuenta que el valor del Inmueble fue cancelado en su totalidad, tal y como se evidencia en el Anexo No. 1 del presente documento.*
2. *INFORMAR, de manera clara y específica la fecha en la cual se efectuará la entrega material del Inmueble, de conformidad con la cláusula décima segunda del Contrato.*
3. *INFORMAR, la fecha estimada de la entrega de los bienes comunes de uso y goce general.*

**RESPUESTA PUNTO 1 Y 2:** Al respecto nos permitimos informar que la suscripción de la escritura pública y entrega del inmueble se llevarán a cabo el próximo 30 de abril de la presente anualidad, la misma tendrá lugar en la notaría 44 del círculo de Bogotá, ahora bien teniendo en cuenta la fecha en la cual se llevará a cabo la escritura del inmueble, una de nuestras asesoras de ventas se estarán comunicando con ustedes a efectos de establecer la hora de la firma, la cual es probable que se establezca en las horas de la mañana a efectos de proceder con la entrega del inmueble en las horas de la tarde del mismo día.

**RESPUESTA PUNTO 3:** Al respecto nos permitimos informar que la entrega de los bienes comunes esenciales se harán entrega el mismo día, aclarando que a la fecha la compañía está extremando las labores a efectos de poder establecer la fecha exacta de entrega de los bienes comunes no esenciales, los cuales le serán entregados a la administración de la copropiedad.

Con lo anterior damos por contestado su derecho de petición.

 CONTESTACIÓN DERECHO DE PETICIÓN.pdf  
117 KB

De: Atención al Cliente

Enviado el: lunes, 27 de marzo de 2023 4:33 p. m.

Para: 'jaimeandreslezama@gmail.com' <[jaimeandreslezama@gmail.com](mailto:jaimeandreslezama@gmail.com)>; 'laura.sharkey@hotmail.com' <[laura.sharkey@hotmail.com](mailto:laura.sharkey@hotmail.com)>

Asunto: respuesta a derecho de petición apartamento 1617

Buena tarde

Señores

**JAIME ANDRES LEZAMA OSORIO**

**LAURA SHARKEY**

Cordial saludo

Me permito enviar contestación de acuerdo a solicitud radicada.

Cordialmente,



Finalmente, solicita declarar la carencia actual del objeto por hecho superado, al no haber vulnerado derecho fundamental alguno de los accionantes.

## 4. CONSIDERACIONES

### 4.1. Competencia

De conformidad con las previsiones del artículo 86 de la Carta Política, en concordancia con los artículos 1º, 37 y 42 del Decreto 2591 de 1991, y el Decreto 306 de 1992, así como con el numeral 1º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1938 de 2017, la suscrita juzgadora es competente para resolver la presente acción de tutela.

### 4.2. Naturaleza de la acción de tutela

El ámbito conceptual que enmarca el campo de aplicación de la acción de tutela, está dado tanto en la consagración que de ella hace nuestra Constitución Política en el artículo 86, como su desarrollo normativo en los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992 que lo reglamentan. En efecto, de esa normatividad surge esa figura jurídica, que puede definirse como una institución especial cuya finalidad es proteger los derechos y libertades fundamentales de la persona, mediante un procedimiento judicial preferente y sumario, cuando aquellos resultan vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier



autoridad pública o de particulares.

#### 4.3. Problema jurídico a resolver

Se trata de establecer a la luz de los preceptos legales y constitucionales, si PRABYC INGENIEROS S.A.S., vulnero o amenaza con vulnerar el derecho fundamental de petición de JAIME ANDRÉS LEZAMA OSORIO y LAURA SHARKEY.

### 5. DEL CASO EN CONCRETO

Sea lo primero señalar que conforme lo establece el artículo 86<sup>2</sup> de la Carta Política, la acción de tutela es un mecanismo constitucional de carácter residual, preferente y sumario, cuyo objeto es la protección judicial inmediata de los derechos fundamentales de la persona que lo solicita directa o indirectamente, con ocasión de la vulneración o amenaza que sobre estos se ha causado por autoridades públicas o excepcionalmente por particulares; siendo un recurso que se encuentra supeditado a los requisitos de legitimidad por activa y pasiva, de inmediatez y subsidiariedad.

Para el caso en conocimiento del Despacho, se acredita la legitimación tanto por pasiva como por activa. En el entendido que, son los señores JAIME ANDRÉS LEZAMA OSORIO y LAURA SHARKEY, quienes acuden al amparo constitucional en protección de su derecho fundamental, es decir se cumple con los presupuestos del art. 10 del Decreto 2591 de 1991; al igual que PRABYC INGENIEROS S.A.S., para ser objeto pasivo de la tutela, por cuanto se trata de una entidad incluida en el numeral 1° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1983 de 2017<sup>3</sup>.

Al respecto, se vislumbra satisfecho el *requisito de inmediatez* por cuanto la acción de tutela se interpuso en un tiempo prudencial, dado que, entre la actuación presuntamente vulneradora del derecho de los señores JAIME ANDRÉS LEZAMA OSORIO y LAURA SHARKEY, esto es la omisión de responder el derecho de petición remitido el 24 de febrero de 2023, transcurrieron 28 días al interponer la acción de tutela el 23 de marzo de los corrientes, superando los 15 días hábiles para contestar el mismo de conformidad con el inciso 1° del artículo 14 de la Ley 1755 del 2015.

Frente al requisito de subsidiariedad, los accionantes se encuentran en una situación de subordinación, derivado de la inexistencia de un mecanismo idóneo y efectivo para velar por la protección de su derecho fundamental invocado.

En cuanto al derecho de petición consagrado en el artículo 23 Superior, se reglamentó mediante la Ley 1755 de 2015, en la que se consignaron entre otros los términos en los que se debe plantearla petición y los criterios para que se entienda resuelta.

Así mismo debe tenerse en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que a partir de lo dispuesto en la citada Ley, estableció mediante sentencia *C-007 de 2017* el contenido de los tres<sup>4</sup> elementos que conforman el núcleo esencial del derecho invocado en el presente trámite tutelar, a saber: *“i) La pronta resolución, ii) La respuesta de fondo y iii) La notificación de la decisión.*

<sup>2</sup> **ARTICULO 86.** Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.

<sup>3</sup> No. 1° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1983 de 2017

<sup>4</sup> Sentencia *C-007 de 2017* “i) La pronta resolución. En virtud de la cual las autoridades tienen el deber de otorgar una respuesta en el menor plazo posible, sin que se exceda del máximo legal establecido, esto es, por regla general, 15 días hábiles;

ii) La respuesta de fondo. Hace referencia al deber de las autoridades de resolver la petición de forma clara, precisa, congruente y consecuencial; y

iii) La notificación de la decisión. Esta atiende al deber de poner al peticionario en conocimiento de la decisión adoptada, pues de lo contrario se desvirtuaría la naturaleza exigible del derecho.

En este sentido, se presenta la vulneración de este derecho fundamental cuando se evidencie que no se ha otorgado respuesta dentro del término que para cada tipo de petición establece la ley, o en aquellos casos en los que, no obstante haberse emitido la respuesta, la misma no puede ser calificada como idónea o adecuada de acuerdo con la solicitud; sin que esto último signifique que la respuesta implique acceder, necesariamente, a lo requerido.”



Señalando además que “(...) **se presenta la vulneración de este derecho fundamental cuando se evidencie que no se ha otorgado respuesta dentro del término que para cada tipo de petición establece la ley, o en aquellos casos en los que, no obstante haberse emitido la respuesta, la misma no puede ser calificada como idónea o adecuada de acuerdo con la solicitud; sin que esto último signifique que la respuesta implique acceder, necesariamente, a lo requerido.**”<sup>5</sup> (Negrilla fuera del texto original)

En ese orden, de las pruebas allegadas al plenario se advierte que el 24 de febrero de 2023, los señores JAIME ANDRÉS LEZAMA OSORIO y LAURA SHARKEY, elevaron una petición ante PRABYC INGENIEROS S.A.S., a través de los correos electrónicos [kjimenez@prabyc.com.co](mailto:kjimenez@prabyc.com.co) , [kdonatobarragan@prabyc.com.co](mailto:kdonatobarragan@prabyc.com.co) , [pmoreno@prabyc.com.co](mailto:pmoreno@prabyc.com.co) , [cleon@prabyc.com.co](mailto:cleon@prabyc.com.co) , [johanna.moreno@accion.com.co](mailto:johanna.moreno@accion.com.co) y [notificacion.cliente@accion.com.co](mailto:notificacion.cliente@accion.com.co) , como lo reconociera la sociedad accionada; respecto a lo cual no recibió respuesta dentro del término dispuesto por la ley, pues de acuerdo con lo manifestado por la aseguradora demanda, respondieron el derecho de petición y notificaron el requerimiento el 27 de marzo del año en curso, como lo acredito durante el trámite tutelar, cesando así la efectiva vulneración al derecho fundamental de petición de los señores JAIME ANDRÉS LEZAMA OSORIO y LAURA SHARKEY.

En relación con esto, ha indicado la Corte Constitucional que el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto tiene ocurrencia cuando, por un hecho sobreviniente a la petición de amparo, se satisface o desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el demandante<sup>6</sup>. En consecuencia, la decisión que puede adoptar el juez respecto del caso específico resultaría, a todas luces, inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto para el amparo constitucional (“Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Administración ...”)<sup>7</sup>.

En este supuesto, ha establecido la jurisprudencia constitucional, que no es perentorio incluir en el fallo un análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se demanda, salvo “*si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, [ya sea] para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo. (“Sentencia de Tutela N° 546/19 de Corte Constitucional, 15 ...”) Esto es, que se demuestre el hecho superado*”<sup>8</sup>.

De allí que, al acreditarse como cumplido el fin perseguido con la acción de tutela, es claro que, en este asunto, se configura la figura del hecho superado. Así las cosas, el Despacho procederá a declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

Finalmente, en consideración a lo expuesto, se conmina a PRABYC INGENIEROS S.A.S., para que en lo sucesivo profiera respuesta a los derechos de petición elevados ante su dependencia en los términos dispuestos por la Ley, y así evitar la vulneración de derechos fundamentales; advirtiendo que el Decreto 491 de 2020, en sus artículos 5 y 6, fue derogado por la Ley 2207 de 2022, la cual rige desde el 18 de mayo de 2022.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO 23 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

## RESUELVE

**PRIMERO. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado**, de la acción de tutela promovida por **JAIME ANDRÉS LEZAMA OSORIO** y **LAURA SHARKEY**, en nombre propio, por los motivos expuestos en las consideraciones de la presente decisión.

<sup>5</sup> Ibidem

<sup>6</sup> Sentencia T-085 de 2018

<sup>7</sup> Sentencia T-678 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, en donde se cita la Sentencia SU-540 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Al respecto, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

<sup>8</sup> Sentencia T-685 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Subrayado por fuera del texto original.



**SEGUNDO. COMUNÍQUESE** a los interesados que contra la presente decisión procede la IMPUGNACIÓN ante el inmediato superior dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la misma, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato, conforme lo preceptúa el inciso primero (1º) del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

**TERCERO:** En firme la presente decisión, se **REMITIRÁ** el cuaderno original de Tutela a la Corte Constitucional, para su EVENTUAL REVISIÓN.

**CUARTO: NOTIFÍQUESE** el contenido del fallo a las partes de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991.

### **Notifíquese y Cúmplase.**

Firmado Por:  
Luz Angela Corredor Collazos  
Juez  
Juzgado Municipal  
Penal 023 De Conocimiento  
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2bd05cbc7dcde65a6b539b133aae596007327943b827f16ffaac924ef8e4e9ca**

Documento generado en 30/03/2023 05:47:43 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>